

Consecuencias políticas y sociales del Programa de Ajuste Económico

Luis Ugalde

"El 51,5% del país en estado de pobreza". Este es el titular de primera página del diario El Nacional de Caracas el domingo 12 de agosto. La fuente es la Encuesta de Hogares del segundo semestre de 1989 realizada por la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI)

Esta cifra representa un 4% más que en 1987. Seguramente el primer semestre de 1990 habrá subido otro par de puntos por lo menos. Sabemos que se manejan cifras mucho más alarmantes que elevan la pobreza hasta un 60% y más. Pero no se trata de dramatizar ni exagerar algo que ya es dramático; nos interesa comprender el fenómeno y sus posibles soluciones.

Es relativamente fácil hablar de algunas manifestaciones sociales y políticas que han tenido lugar en 1989 y 1990 en Venezuela. Las protestas revelan un profundo malestar y crisis. Mucho más difícil es precisar hasta qué punto son consecuencia del programa de ajuste económico o más bien se deben a la realidad heredada que se trata de corregir con las medidas del actual gobierno. Mayor dificultad encierra aún la discusión sobre los duraderos efectos sociales y políticos del programa de ajustes, más allá del "Shock" inicial. Unos dirán que los serios problemas que vivimos en 1990 son una pequeña muestra de una crisis mayor acentuada por las medidas del actual gobierno. Otros, en cambio, afirman que la actual intervención quirúrgica, aunque muy dolorosa, salvará con relativa prontitud al cuerpo social y político enfermo.

1. ALGUNAS REALIDADES SOCIO-POLÍTICAS

Antes de entrar a emitir opiniones recojamos en una apretada enumeración los hechos más hirientes y de incidencia directa en la calidad de vida de la mayoría de la población venezolana:

- a) Inflación, desempleo y disminución de la producción: En 1989 la inflación alcanzó la mayor cota del siglo: 80% y el desempleo llegó al 10 % mientras el PIB disminuyó en un 8,5%.
- b) Descenso de los ingresos reales. Los ingresos reales por familia han bajado a niveles de 1964 y los indicadores de salud a los de 1960.
- c) Se acentúa la polarización social. Empobrecimiento de los sectores medios y concentración de la riqueza. Reversión del proceso de los últimos 30 años.
- d) Deterioro de los servicios públicos como salud, educación, transporte, programas de vivienda, correos, teléfonos, agua, electricidad...
- e) Desfile de escándalos políticos y corrupción extendida
- f) El estallido social del 27 de febrero de 1989, seguido de una ineluctablemente, innecesaria e indiscriminada represión militar, dejó al descubierto la fuerte pérdida del liderazgo político de su conexión con la base popular y sus problemas.
- g) La protesta electoral de diciembre de 1989 en la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes. Elevadísima abstención (54,4%), en contraste con la tradición electoral venezolana, voto

castigo contra el partido de gobierno, al salir favorecidos los candidatos de la oposición y quienes denunciaron la corrupción.

De esta enumeración se pudieran sacar conclusiones catastróficas sobre la debilidad del sistema político venezolano o sobre la alta probabilidad de explosión social o de movimientos subversivos y sobre el fracaso de las medidas económicas. Sin embargo creo que no serían acertadas. En lo que respecta a los dos primeros puntos, el social y el político, no comparto esas conclusiones. En cuanto al tercero se debe hacer un análisis matizado y cuidadoso. Antes de referirme a este quiero señalar esquemáticamente algunos puntos sobre los otros dos.

- Las dos manifestaciones de protesta social y política señaladas apuntan a una grave responsabilidad de la dirigencia política, sindical y económica, especialmente durante la última década. De ninguna manera esas manifestaciones demuestran un espíritu de aventura política, de violencia social o de delincuencia generalizada en la población de menores recursos. Más bien se puede hablar de una sana reacción de la población (aunque ciertamente lamentable) ante la inutilidad y corrupción de los cauces sociales y políticos legalmente establecidos para resolver los problemas. Parece insensato continuar especulando con otra próxima explosión social que no la creemos probable.
- Igualmente estamos en desacuerdo con el enfoque militarista y represivo de algunos sectores de la dirigencia nacional. Estos atribuyen las protestas a actividades subversivas o a una especie de instinto incivilizado generalizado en los sectores populares y que debe ser mantenido a raya a base de represión policial y militar.
- Si bien a lo largo de 1989 han aumentado lógicamente las movilizaciones populares de protesta y de reivindicación, en la inmensa mayoría de los casos se trata de causas justas manifestadas de manera pacífica y razona-

ble. En un estudio de las movilizaciones sociales reseñadas en el periódico *El Nacional* durante el primer semestre de 1990, aparece que de 145 movilizaciones 114 fueron no violentas. Un total de 123 movilizaciones fueron contra el gobierno y empresas públicas, 3 contra empresas privadas y 19 tuvieron otros destinatarios. (Datos facilitados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello).

2. RESPONSABILIDAD DE LAS MEDIDAS ECONOMICAS

No se puede afirmar que los hechos del 27 de febrero y la votación de diciembre de 1989 tuvieron como causa directa las medidas de ajuste económico tomadas por el actual gobierno. Estas sí pudieron crear algunas circunstancias que actuaron de detonante, pero el mal expresado era de fondo e independiente de las medidas. Sin embargo sería precipitado concluir que las medidas no sean causa del creciente deterioro social y político de 1990 y siguientes. Ciertamente han acentuado los problemas sociales y políticos a corto plazo. Fuera de las promesas no hay ninguna certeza de que a mediano plazo produzcan efectos sociales y políticos positivos en la mayoría de la sociedad.

Solamente si producen un cambio profundo en los diversos actores sociales que determinan la vida económica, política y social del país pueden esperarse efectos positivos a mediano plazo. Esos actores son el Estado, incluyendo al poder judicial, legislativo y el ejecutivo, los partidos políticos, la empresa privada y la sociedad civil en general. A estos factores nacionales deben añadirse la economía internacional y sus actores que tan determinante están pesando sobre las decisiones y medidas que toma el gobierno actual.

Las recetas impuestas desde fuera por organismos financieros internacionales tienen algunos elementos evidentes como son la necesidad

de frenar la inflación, equilibrar la balanza de pagos y reducir el déficit fiscal. También parece evidente el objetivo de conseguir como efecto duradero el aumento de la productividad real del país en todos los ámbitos de la producción de bienes y de servicios. Sin esta base no es posible lograr un bienestar social y político. Lo que en el pasado descansó en la abundante renta petrolera, en el futuro debe descansar en la producción de cada venezolano administrada con honestidad y justicia.

Creemos que en la COPRE y en otros sectores del propio gobierno hay planteamientos claros que no se reducen a repetir las recetas externas que, con pocas variantes, ha impuesto el FMI a los países latinoamericanos. Estos analistas y miembros del gobierno tampoco comparten la visión maniquea y represiva en el tratamiento de las protestas populares, más bien buscan respuestas racionales a graves fallas del funcionamiento del Estado venezolano y de los partidos políticos. Conocen las razones por las cuales no funciona el mercado libre interno en las actuales condiciones de gran concentración de la riqueza y de intercambio dominado por la oferta monopólica y oligopólica de bienes frente a una demanda que está muy lejos de poder hacer valer su interés por la calidad de los productos y por la productividad. Conocen también los graves problemas sociales, la debilidad de la sociedad civil y las deficiencias de un sector empresarial poco preparado para la competencia y la innovación y con frecuencia viciado por la manipulación y apropiación privada (sin referencia a la productividad) de los abundantes recursos del Estado petrolero.

Sólo desde un enfoque que integre el programa económico y el social se puede tener una visión de los efectos socio-políticos de las medidas de ajuste. Por desgracia a veces da la impresión de que ciertas medidas económicas se tomaron de inmediato, para luego empezar a pensar las políticas sociales como simples medidas de alivio que se irán implantando muy lentamente. Y esta dife-

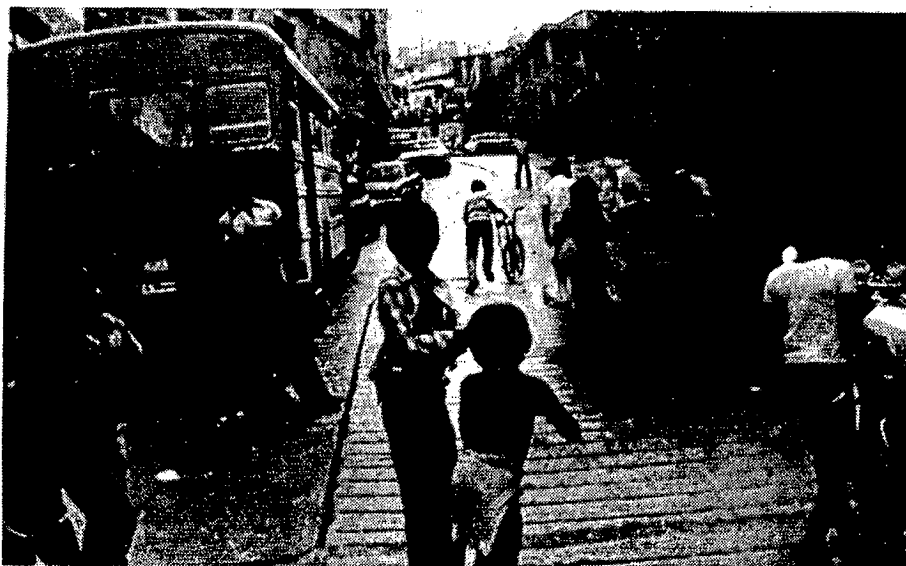
rencia de tiempo, unida a la falta de concepción íntegra, puede ser fatal. Si la política social es mera política asistencial para curar los numerosos heridos y moribundos producidos por la económica, terminará en un despilfarro de recursos sin efectos positivos duraderos. Tampoco se pueden dejar las soluciones y programas sociales y políticos a una creencia implícita en la mano invisible que de manera providente terminará equilibrando y produciendo los beneficios que se supone debe producir la economía de mercado libre. No podemos ignorar siglo y medio de experiencia de la sociedad industrial en este sentido.

3. ¿CUAL ES LA RIQUEZA DE LA NACION?

Para que las soluciones sociales y políticas sean efectivas y para que el empobrecimiento de la mayoría no sea duradero nos parece imprescindible que el liderazgo con poder de decisión esté de acuerdo con la convicción de los clásicos sobre la riqueza de la nación: ésta no consiste en el oro y la plata, ni en los recursos naturales, ni en la opulencia de una minoría, sino en la condición de productores efectivos de la mayoría y en su creciente productividad. Una nación con la mitad de la población pobre, siempre será una pobre nación.

Otra idea complementaria a ésta es que la mayor pobreza para personas sanas y en edad apropiada es la de no ser productores y que para combatirla se debe utilizar el recurso más abundante de los pobres que es su trabajo y todas sus capacidades ociosas. Creemos que sólo si esto se convierte en objetivo económico, puede tener verdaderos efectos sociales y políticos. De este modo la consideración macroeconómica y la condición personal de los pobres lleva a concluir que el mejoramiento político, social y económico pasa por la incorporación de la mayoría como productores de creciente productividad.

En buena parte es cierto que las décadas anteriores un Estado petro-



lero hipertrofiado, una política clientelista y un empresariado poco audaz y creativo (salvo honrosas excepciones), no contribuyeron a hacer que toda la población fuera productora. Prevalecía un modelo de apropiación de la renta petrolera en el que la producción y la productividad creciente no eran las mediaciones imprescindibles para acceder a los bienes y servicios deseados, ni para acceder al capital. La renta petrolera permitía un subsidio generalizado y un modo de hacer política partidista y de gobernar basada en el clientelismo, en el crecimiento de una burocracia ineficaz y en buena parte parasitaria. A su vez se fue creando una perversa relación entre el sector privado y público marcada por la protección, el ocultamiento de la ineficacia en las propias empresas privadas y la ilegal transferencia de recursos públicos al sector privado con el consiguiente florecimiento de la corrupción. Un pobre desarrollo de la sociedad civil y de sus organizaciones múltiples, independientes del Estado y de los partidos, trajo como consecuencia el débil poder de control de la sociedad organizada sobre la gestión pública y la poca productividad social de la sociedad civil.

El Estado en Venezuela tiene todavía los recursos suficientes para promover un ordenamiento económico y una utilización de sus propios recursos sistemáticamente orientada a promover la condición de productores de todos los venezolanos.

Es claro que ciertos recursos productivos actualmente en manos del estado (hay unas 400 empresas estatales) deben ser transferidos al sector privado. Así el estado podrá concentrar más su atención en los urgentes problemas sociales. Algunas de esas empresas deberán pasar al sector privado en un proceso limpio y libre de corrupción y después de cuidadoso estudio caso por caso: unos deberán ser transferidos y otros no. Sobre todo debe evitarse que el proceso esté distorsionado por cargas ideológicas de diverso signo, más bien debe prevalecer un sentido pragmático enfocado hacia la atención y potenciación de las necesidades y capacidades del pueblo.

Al mismo tiempo el Estado tiene que elevar la productividad en todas las áreas en las que actúa como productor de bienes y servicios. Pero la productividad no se eleva porque sea un deber ser; para ello tiene que funcionar el sistema social de premios y castigos.

El Estado debe evitar al máximo la transferencia de sus recursos al exterior sin una clara contrapartida en bienes prioritarios para el país. No está de más recordar que en Venezuela en 1988 más de la mitad de las divisas obtenidas de la venta del petróleo fueron destinadas al pago de los intereses de la deuda externa sin reducirla.

El estado debe sistematizar una política que impida la transferencia de los recursos públicos a la empresa privada que no sea como pago de

producción efectiva.

Una de las tareas más importantes y complejas del Estado es ir creando las condiciones de mercado en las que efectivamente la competencia estimule el mejoramiento de la calidad y el aumento de la productividad. Pero no debe tomar decisiones como si ya existiesen esas condiciones.

Otra necesidad evidente es la reducción de la burocracia pública a menos de la mitad de la actual pero mejor pagada y más eficaz y eficiente. Pero esto no puede hacerse sin una reactivación del sector privado de manera que pueda absorber más de medio millón de empleados que sobran actualmente.

El Estado, frente a la masa empobrecida de la población --condenada a ser subproductora o a vivir de limosna--, debe orientar buena parte de sus recursos a posibilitar su transformación en productores y a estimular su productividad. De esta manera (creemos que es la única) se logrará que sea el pobre quien combata la propia pobreza.

4. EL COMBATE CONTRA LA POBREZA

La lucha contra la pobreza es pues sinónimo de convertir al pobre en productor y no en acentuar su desempleo y subempleo con una mano para desarrollar con la otra programas asistenciales.

Esta lucha requiere un destino de recursos --no necesariamente mayores que los actuales-- al área de salud y de la educación popular, pero modificando totalmente su productividad bajo una nueva combinación de la organización comunitaria de los usuarios, de la empresa pública y de la iniciativa privada. El criterio es producir salud y educación haciendo que la propia población pobre sea coproductora con sus recursos hoy ociosos y exigiendo y vigilando a quienes (iniciativa pública o privada) prestan ese servicio. Uno de los grandes problemas de Venezuela es que en los medios populares la capacidad instalada de los centros educativos y de los centros de salud

funciona a menos del 50% del potencial. Un crecimiento organizativo-productivo de la comunidad que necesita esos servicios hará que los mismos rindan tres o cuatro veces más. Un trabajo así acentúa el trabajo en salud preventiva a través de comités de salud, asegura el cuidado y mantenimiento de los centros; y la exigencia de la comunidad organizada a elevar la productividad de los empleos públicos de la salud y logra la incorporación de los privados a esta tarea.

Una nueva combinación del usuario organizado y de entidades públicas y privadas hace que haya cierta competencia y exigencia mutua. La política trazada debe aplicarse reduciendo al mínimo los vicios del clientelismo político y del burocratismo parasitario.

Consideramos que la posibilidad de que en la educación y en la salud el usuario pueda escoger entre un centro educativo u otro, entre un médico u otro, entre una clínica u otra es imprescindible para lograr elevar la calidad y la productividad. Ahora bien, no hay que presuponer que ya existe la comunidad organizada y dispuesta a elevar su productividad o la productividad de los que prestan los servicios. La organización de la sociedad civil es una tarea y lo es muy significativamente entre los sectores pobres.

Lo dicho puede servir también para otras áreas como la recreación, transporte, mejoramiento ambiental y de viviendas. A medida que se vaya logrando el saneamiento y la calidad de servicios hoy muy deficientes, la capacidad de la comunidad organizada tiende a desplazarse a otras áreas.

Políticas similares, con sus variantes, se pueden aplicar en el área de la producción de viviendas, por ejemplo.

Si bien todo esto genera cierta cantidad de empleo, un tratamiento específico debe dársele a las empresas productivas que nacen de la iniciativas de los individuos y de los grupos en los sectores de menores recursos. De todos es sabida la importancia cuantitativa de este tipo de empleo productivo en los sectores

pobres. También en este sector llamado "informal" tiene que haber una política combinada (actividad pública, actividad privada, iniciativa comunitaria) para dar apoyo de formación permanente, capital, administración, mercadeo.... a estas iniciativas.

Tanto en el combate contra la pobreza como en otros niveles y actividades económicas y políticas más que hablar de privatización de manera indiscriminada, es necesario crear una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil, entre lo público y lo privado para producir mayor estímulo y exigencia mutua de calidad y de productividad.

5. ALGUNAS PREGUNTAS FINALES

Las medidas de ajuste macroeconómico se tomaron en el primer semestre de 1989, las medidas sociales para compensarlas o para aliviar sus efectos más duros se van tomando muy lentamente o simplemente no se toman. Algunos de los enfoques que hemos señalado no son ajenos a ambientes del gobierno y poco a poco pueden ir avanzando, pero lo trágico es que la población queda indefensa ante el efecto inmediato de las medidas de ajuste y esto puede crear situaciones que impidan los posibles buenos efectos de esas medidas.

Desde la situación real de la economía venezolana y desde la perspectiva de los efectos sociales y políticos pueden hacerse algunas preguntas a las que no encontramos respuestas coherentes y satisfactorias en los defensores de esas medidas:

- ¿Una política cambiaria de apertura y de libertad total puede producir otra cosa que un trasvase brutal de recursos de Venezuela hacia el exterior, hacia esos mismos países a los que estamos pidiendo refinanciamiento y "ayudas" mucho menores? ¿La manera de tratar de frenar esto a base de altos intereses internos no ha sido una multimillonaria política de subsidios al sistema financiero

alimentada con la renta petrolera? Lograr frenar la salida de capitales con sistema de libre cambio y con una economía real paralizada resulta algo insostenible, artificial e injusto.

¿No se traduce esto en desestímulo a la actividad productiva en el país debido al alto costo del dinero y en estímulo a la actividad financiera subsidiada y en definitiva a una fuga de capitales demorada? ¿Cómo se explica que los principales países capitalistas -- salvo excepción de tres o cuatro -- en la recuperación que siguió a la Segunda Guerra Mundial no establecieron el libre cambio de su moneda y que eso haya durado hasta nuestros días.

En una política económica de fomento de la producción agrícola e industrial orientada a la exportación no se corre el riesgo de que se prescinda de la mayoría del país pues no interesa ni como productores ni como consumidores? ¿No es fundamental la búsqueda de la incorporación productiva de la mayoría de la población y la consiguiente expansión del mercado interno como complemento de la apertura a las exportaciones? Estamos pensando en esos diez millones de venezolanos en niveles de pobreza ¿Una política económica internacional destinada a captar aquellos factores del Tercer Mundo que pueden interesar al capitalismo mundial no termina buscando sólo las riquezas naturales de nuestros países y un pequeño segmento privilegiado de nuestras sociedades condenando a la mayoría a una pobreza y miseria permanente?

En un orden mundial de tan desigual nivel tecnológico y de productividad la brusca liberación total, sin efectivas condiciones de competitividad, ¿no es simplemente la negación de las potenciales virtudes del libre mercado? ¿No se puede decir algo similar sobre el mercado interno libre sin que existan las condiciones para ese mercado?

¿Cómo se explica que en todas las naciones capitalistas, aun en las

más liberales y prósperas se haya dado una protección especial a la agricultura con diversos mecanismos y que se quiera implantar en Venezuela una economía liberal sin tener en cuenta las peculiares condiciones de producción agrícola y de la demanda interna de alimentos?. ¿Con una política así sería posible la agricultura en Alemania o en Israel?. ¿Una política agrícola orientada principalmente a la exportación no genera más desempleo, más aumento de la pobreza de la mayoría y más importaciones agrícolas?. ¿Cómo podría la gran masa de trabajadores, con salarios que no llegan a la décima parte de los de un trabajador de país industrializado, comprar productos agrícolas pagando lo que puede pagar la demanda de los países industrializados?

El actual nivel de ingresos del Estado venezolano, el actual sistema democrático, las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías de Venezuela, con una política razonable de intercambio y de apoyo internacional, tienen las posibilidades para producir las soluciones que necesita. La conflictividad está en niveles manejables. El país cuenta con una amplia red de servicios y hay una apreciable infraestructura. El Estado, los políticos y los empresarios creados con la renta petrolera necesitan un cambio que enfatice la productividad social y económica propia y que busque ofrecer la oportunidad y el estímulo para que cada venezolano se convierta en productor. Sólo así será posible resolver los efectos sociales y políticos negativos que hoy alarman a mucha gente.

El libre mercado idealmente es una forma de negociación de intereses contrapuestos. Para que la negociación beneficie a todos los participantes todos deben tener un poder económico real. Y también para que se permita la calidad y la productividad. Para que se cumpla el ideal liberal de mercado de bienes y de servicios, el usuario tiene que estar en condiciones de hacer valer su deseo de calidad y de premiarla. Esto no ocurre en un mercado monopolístico dominado por la oferta.

Además en la sociedad nacional e internacional hay otros aspectos de la convivencia humana que son objeto de negociación entre las partes. No puede dejarse a la supuesta bondad, altruismo y desinterés de ninguna de ellas el bien de la otra. En este sentido tanto a nivel internacional como nacional es necesario que los más pobres tengan efectivo poder de negociación de sus intereses. Sin esto los principios liberales se convierten en autorización para el

abuso y la opresión. Y es el Estado quien debe velar por la efectiva capacidad de negociación interna de las mayorías pobres y externa de un país altamente dependiente. Un país petrolero como Venezuela seguirá contando con recursos más que suficientes para una población de veinte millones de habitantes siempre que logre manejarlos con honestidad y fomentar con ellos la productividad económica, social y política de cada venezolano.

DIA DE LA ACCION POPULAR 91

El Encuentro de Todos

77 MUSICA
KIOSCOS DE COMIDA
ARTESANIA
ACTIVIDADES CON NIÑOS
PUBLICACIONES
PARQUE LOS CAOBOS
DOMINGO 20 de ENERO 9:00 AM

¡Se esperamos!!

**EL BIENESTAR:
¡SE CONSTRUYE Y SE DISTRIBUYE!**

CEAP

INFORMACION POR LOS TEL.: 813885 - 827423